



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-020-2019-00621-01 (O2-22-163)
Accionante: DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ
Accionada: COLPENSIONES E.I.C.E. y UGPP
Procedencia: JUZGADO 20 LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No. 0012
Asunto: COMPATIBILIDAD PENSIONAL

En Medellín, a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-020-2019-00621-01 (O2-22-163), instaurado por DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. y donde fue integrado el contradictorio con la UGPP, con el fin de resolver el Recurso de Apelación impetrado por la parte demandante y COLPENSIONES E.I.C.E., así como el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última entidad pública, respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 28 de marzo de 2022 por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

El señor DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. a efectos de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, al ser beneficiario del régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la misma normativa y las costas.

En respaldo de sus aspiraciones señala que inició a prestar sus servicios a favor de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – TELECOM, hoy liquidada, a partir del 04 de diciembre de 1953 y hasta el 31 de diciembre de 1977, desempeñando como último cargo el de Operador Telefonista y devengando como última remuneración mensual, una suma igual a \$6.724,00. Indica que, con ocasión al tiempo de servicio prestado con TELECOM, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM E.I.C.E., le reconoció pensión de jubilación de acuerdo con el Decreto 1237 de 1946, la Ley 4ta de 1966 y el Decreto 3135 de 1968.

Aduce que posterior a su retiro de TELECOM y a partir del 1° de enero de 1978, se vinculó con otros empleadores quienes efectuaron el pago de aportes al SGSSI a su favor y a órdenes del Instituto de Seguros Sociales y CAJANAL; aportes que se sufragaron hasta el 30 de noviembre de 1996, cuando se produjo su desvinculación. Expone que el 24 de agosto de 2018 solicitó a COLPENSIONES E.I.C.E. el reconocimiento de la pensión de vejez; sin embargo, esta administradora en Resolución SUB270125 del 16 de octubre de ese año, resolvió negar la prestación bajo el supuesto que resulta incompatible con la pensión de jubilación que disfrutaba por cuenta de CAPRECOM E.I.C.E., decisión que fuera confirmada en actos administrativos SUB69795 y DPE2609 del 21 de marzo y 07 de mayo de 2019 respectivamente. Añade que contrario a lo considerado por la demandada, las prestaciones pensionales no devienen incompatibles, al provenir de orígenes abiertamente diferentes y considerando por ello que le asiste derecho a sus pedimentos.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 18 de octubre de 2019 (pág.78 a 80, doc.01, carp.01), y se notificó a la demandada COLPENSIONES E.I.C.E., el 06 de noviembre del 2019 (pág.81, doc.01, carp.01), la que se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Frente a la narración de los hechos de la demanda, aceptó como ciertos aquellos que hacen referencia al estatus de pensionado del accionante por parte de CAPRECOM E.I.C.E. y por el tiempo de servicio prestado a favor de TELECOM, así como la solicitud de reconocimiento pensional presentada por aquel y la respuesta brindada a la misma; manifestando no ser ciertos los demás. En su

defensa propuso las excepciones de fondo que rotuló como inexistencia de la obligación de pago de pensión de vejez, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, buena fe de Colpensiones, prescripción, compensación, imposibilidad de condena en costas y la genérica. (págs.82 a 91, doc.01, carp.01).

Igualmente, se puso en conocimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Procurador Judicial Delegado en Asuntos Laborales, la existencia del presente proceso, en su orden, el 07 de abril de 2021 y el 03 de diciembre de 2019 (doc.08, carp.01).

Posteriormente en auto del 13 de abril de 2021 (doc.10, carp.01), se resolvió integrar el contradictorio con la UGPP, entidad que refutó también las súplicas de la demanda, aceptando como cierto únicamente lo atinente al estatus de pensionado del promotor, manifestando no ser ciertas las demás situaciones fácticas narradas. Elevó en su defensa las excepciones de fondo que nominó como falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, pago y compensación, violación al principio de legalidad, buena fe, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

Seguidamente, en auto del 22 de marzo de 2022 se decretó la sucesión procesal en el extremo activo ante el deceso del señor DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ el pasado 16 de julio de 2021 (doc.20, carp.01), continuando la actuación, de acuerdo con el artículo 68 del CGP, con la señora Francia Elena Muñoz Oviedo, cónyuge del causante.

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 28 de marzo de 2022 (docs.40, 42 y 43, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, en la que resolvió entre otros apartes, reconocer el derecho pensional invocado a partir del 24 de agosto de 2015 y hasta el 16 de julio de 2021, fecha del deceso del promotor de la litis y sin lugar al pago de los intereses moratorios solicitados.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado luego de explicar el contenido y alcance del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y de los requisitos establecidos para la causación de la prestación de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, determinó que el accionante cumplía los lineamientos contenidos en las disposiciones legales y por ello, se hacía acreedor a la pensión solicitada. Frente a la densidad de semanas cotizadas, tuvo en cuenta los tiempos públicos y privados cotizados por el actor, acogiendo el criterio establecido por la Sala de

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL225 de 2022 y SL4978 de 2021, así como por la Corte Constitucional en sentencias SU-764 de 2014 y SU-057 de 2018.

Así mismo, sostuvo que la prestación pensional pretendida y la que disfrutaba el señor DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ por el tiempo de servicio prestado a TELECOM eran compatibles, resaltando que a pesar de la naturaleza jurídica de COLPENSIONES E.I.C.E., los recursos que financian la pensión de los afiliados no son de origen público, sino que, se conforman con los aportes de los empleadores y los trabajadores, por lo que no se incumple la prohibición contenida en el artículo 128 de la CP, máxime cuando para el caso del accionante las semanas que integran el derecho pensional son diferentes a las que tuvo en cuenta CAPRECOM para reconocer la pensión inicial (minuto 31:10 a 40:58, doc.042, carp.01 y minuto 00:01 a 23:43, doc.043, carp.01).

1.3. Recurso de Apelación

La procuradora judicial de los sucesores procesales de DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación, dirigido a que se revoque la decisión adoptada en la primera instancia, en punto a que se acceda al reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, bajo el supuesto que la convocada COLPENSIONES E.I.C.E. se abstuvo de reconocer el derecho pensional objeto de litigio dentro del término legal establecido (minuto 27:50 a 30:03, doc.43, carp.01).

A su turno, el apoderado judicial de la administradora del RPMPD impugnó la decisión adoptada por el *a quo*, recalcando la prohibición consagrada en el artículo 128 de la CP de recibir dos asignaciones provenientes del tesoro público, lo que a su parecer se configura en esta controversia, si se tiene en cuenta el carácter público de los recursos de las prestaciones económicas cuya compatibilidad se depreca, dada la naturaleza jurídica de su representada y de la entidad CAPRECOM E.I.C.E. que pensionó al demandante señor GARRIDO JIMÉNEZ (minuto 25:16 a 26:50, doc.43, carp.01).

1.4 Grado Jurisdiccional de Consulta

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue adversa a los intereses COLPENSIONES E.I.C.E., la sentencia será examinada bajo el grado jurisdiccional de consulta, en favor de la antedicha entidad, en los puntos en los que no fue objeto de alzada.

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación se admitió el 23 de mayo de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 31 de del mismo mes y año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 el Decreto Legislativo 806 de 2020 –vigente para la época-, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

El vocero judicial de COLPENSIONES E.I.C.E. transcribió los apartes pertinentes del artículo 128 del CP y del artículo 19 de la Ley 4 de 1992, aseverando que el reconocimiento pensional debe ser revocado por cuenta de la naturaleza jurídica de la administradora del RPMPD y de CAPRECOM, al ser los recursos que manejan ambas entidades de origen público. A renglón seguido, cita el artículo 17 de la Ley 549 de 1999 en lo atinente a la conformación de los bonos pensionales y el traslado de los aportes o tiempo de servicios no incluidos para la causación del derecho pensional, a la entidad pensionaria para la financiación de la prestación.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la demandante y la convocada, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del CPTSS, el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, al igual que se estudiará integralmente la decisión en el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES E.I.C.E., para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar si el señor DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ dejó causado el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a cargo del régimen solidario de prima media con prestación definida dentro del Sistema General de Pensiones, efecto para el que será necesario específicamente establecer, si para la prestación pensional que se causa en favor de los afiliados dentro dicho sistema se acreditan los requisitos de edad y semanas mínimas exigidas, y si es compatible con la pensión de jubilación que venía disfrutando por parte de CAPRECOM E.I.C.E. con ocasión al tiempo laborado al servicio de la extinta TELECOM.

2.2. Sentido del Fallo

El sentido del fallo de esta Corporación será **modificatorio** en cuenta a la cuantía de la mesada pensional determinada; **revocatoria**, en lo atinente a los intereses moratorios solicitados, y **confirmatoria** en lo demás; en tanto la pensión de jubilación a la que tuvo derecho el señor DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ como trabajador de TELECOM es compatible con la que se causó por virtud del cumplimiento de lo señalado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta que **i.** los requisitos para obtener la pensión de jubilación primigenia fueron alcanzados antes de la entrada en vigencia del SGSSI; **ii.** la pensión de jubilación estuvo a cargo de una Caja de Previsión Social, y; **iii.** la fuente u origen de los recursos sobre los cuales se financia una y otra prestación son disímiles.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que el señor DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ prestó sus servicios de trabajo a favor de la hoy liquidada TELECOM durante el lapso comprendido entre el 04 de diciembre de 1953 el 1° de agosto de 1977 (págs.18 a 30, doc.01, carp.01); que CAPRECOM E.I.C.E le reconoció pensión de jubilación en Resolución 02374 del 10 de octubre de 1977 teniendo en cuenta el tiempo servido a TELECOM (págs.31 y 32, doc.01, carp.01); y que el señor GARRIDO JIMÉNEZ falleció el 16 de julio de 2021 (doc.20, carp.01).

Adicionalmente, no se discute que el demandante a partir del 1° de julio de 1977 y hasta el 30 de noviembre de 1996, efectuó cotizaciones al seguro obligatorio administrado por el entonces Instituto de Seguros Sociales y aun a través de la Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL (págs.36 a 45 doc.01, carp.01), y que es beneficiario del régimen de transición pensional reglado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al contar con más de 40 años de edad a la entrada en vigencia del SGSSI (págs.13, doc01, carp.01).

2.3.1 De la incompatibilidad en materia pensional

A manera de argumentos introductorios, se tiene que el SGSSI *“está instituido para unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social, así como para coordinar a las entidades prestatarias de las mismas, para obtener las finalidades propuestas en la presente ley”* (artículo 6, Ley 100 de 1993), y si ello es así, en aplicación precisamente del principio de unidad o unificación que se erige como uno de sus objetivos, no resulta admisible que un mismo afiliado sea beneficiario de dos o más prestaciones económicas con idéntico propósito, cual es, la protección de una determinada contingencia o riesgo asegurado, *verbi gratia*, la vejez; inferencia que se torna palmar con el mandato expreso de los literales f y g del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que imponen la obligación en cabeza de las administradoras de fondos de pensiones, de tener en cuenta para la causación del derecho pensional, el tiempo de servicios y las semanas cotizadas por los afiliados, ora por intermedio del Instituto de Seguros Sociales ora a través de las Cajas de Previsión Social, aun antes de la vigencia del SGSSI.

No obstante lo dicho, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha reconocido también, a manera de excepción, la compatibilidad entre la prestación de vejez y la de jubilación bajo condiciones especialmente delimitadas, como lo son: **i.** que los requisitos para obtener la pensión de jubilación primigenia hayan sido satisfechos antes de la entrada en vigencia del SGSSI; **ii.** que la pensión de jubilación de la cual se predique su compatibilidad, esté a cargo de una Caja de Previsión Social, y; **iii.** que las fuentes o el origen de los recursos con los que se financia una y otra prestación sean claramente distintos o diferenciables. Así en decisiones SL5228 de 2018, SL5068 de 2019 y SL4255 de 2020, adoctrinó:

Frente a los reproches jurídicos endilgados por la censura, cabe destacar que actualmente la jurisprudencia de esta Corporación sostiene que la regla general del sistema de pensiones dispuesto por la Ley 100 de 1993 es la incompatibilidad entre pensiones que amparen la misma contingencia, en virtud de los principios de universalidad, solidaridad y unidad que gobiernan el mismo, los cuales impiden que un mismo afiliado perciba dos prestaciones que cubran el mismo riesgo, máxime que dicha normatividad permite la

acumulación de cotizaciones indistintamente de su procedencia u origen a efectos de aumentar el valor de la base de liquidación.

De igual forma, en relación con las pensiones de jubilación derivadas de servicios prestados al Estado, tal como la prevista en la Ley 33 de 1985, la Sala ha predicado que podrían llegar a ser compatibles con las prestaciones generadas por cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, siempre y cuando el tiempo de servicios sea completado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 o cuando se trate de una prestación reconocida a través de Cajas de Previsión, donde claramente haya diferenciación en las fuentes de financiamiento.

Bajo este entendido se ha afirmado que únicamente cuando cualquiera de las dos prestaciones respecto de las cuales se pretende la compatibilidad se hubiese causado antes de la Ley 100 de 1993 es que se puede predicar la simultaneidad en su percepción, siempre y cuando provengan de tiempos diferentes como los públicos y los privados, pues de lo contrario resultará inviable la compatibilidad y se impondrá la incompatibilidad.

[...].

En ese sentido deben leerse las decisiones que esta Sala de la Corte ha decantado, esto es que únicamente bajo el evento de que cualquiera de las dos prestaciones de las que se pide su compatibilidad, hubiesen sido causadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, es que puede predicarse su compatibilidad, o cuando provengan de distintos tiempos, como los públicos y privados, pues de lo contrario se entenderá que es inviable.

Así, por ejemplo, en la CSJ SL452-2013 se declara la compatibilidad, pero porque la pensión de docente se dispuso por una Caja distinta del ISS, como de allí se lee:

«En sentencias como la del 6 de diciembre de 2011, Rad. 40848, la Sala ha dicho que no existen razones jurídicamente válidas para concluir que la pensión de jubilación oficial que se reconoce a un docente, resulte incompatible con la pensión de vejez que puede obtener el Instituto de Seguros Sociales, por servicios prestados a instituciones de naturaleza privada.

[...].

Además los reglamentos del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES no restringen la viabilidad de que los profesores de establecimientos educativos de orden particular aporten para obtener la pensión de vejez, sino que, más bien, de su examen lo que se colige es que son afiliados forzosos al régimen de prima media con prestación definida, de suerte que a sus empleadores se les impone el deber de vincularlos y sufragar las cotizaciones causadas, mientras permanezca vigente la relación laboral, como sucedió en el evento bajo examen, en el que los colegios Salesiano San Medardo, desde febrero de 1996 hasta junio de 1972 (sic), y La Presentación, desde febrero de 1977 hasta noviembre de 2004, honraron la obligación de realizar los aportes para pensión. [...].

En el *sub iudice*, es claro que para el caso del demandante se dan por cumplidos los requisitos antes estudiados y desarrollados por la máxima autoridad en la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y seguridad social, y siendo ello así, cristalino se muestra que la pensión de jubilación que le fuera concedida a aquel a través de la Caja de Previsión de

Comunicaciones – CAPRECOM E.I.C.E. en la Resolución 02374 del 10 de octubre de 1977 (págs.31 y 32, doc.01, carp.01), fue causada antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y solo se tuvo en cuenta para la titularidad y causación del derecho, el tiempo de servicio prestado a TELECOM (págs.18 a 30, doc.01, carp.01), lo que comporta *prima facie*, la diferenciación no solo en la administradora a cargo de cada prestación económica, sino también, en el origen de los recursos para su financiación.

Seguidamente, adentrándose la Sala al estudio de la prohibición señalada en el artículo 128 de la CP, se conoce que *[n]adie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley*; entendiéndose por “tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas”.

En este sendero, conviene recordar que estas limitaciones de igual manera se replican en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, las cuales en su orden establecen que:

Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes asignaciones:

- a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa;*
- b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;*
- c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;*
- d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;*
- e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;*
- f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;*
- g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley benefician a los servidores oficiales docentes pensionados.*

En síntesis, la prohibición antes señalada se contrae a percibir de manera simultánea por parte de un mismo beneficiario más de una prestación que provenga del *tesoro público, esto es, la Nación, las entidades territoriales y descentralizadas cuando se pagan con cargo a tales recursos, como acontece con las pensiones de jubilación en cabeza de una entidad descentralizada, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado o las sociedades de economía mixta en las que predomine el capital estatal*, y así lo ha colegido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en decisiones SL3226 de 2020 y SL 2599 de 2021, entre muchas otras.

En orden a lo anterior, de manera preliminar, y con una interpretación desprevenida de las disposiciones normativas antes citadas, bien podría concluirse que la razón está de lado de la parte demandada, como quiera que dada la naturaleza de CAPRECOM E.I.C.E. y de COLPENSIONES E.I.C.E., las prestaciones económicas reconocidas por una y otra administradora, provienen de manera coincidente del erario, por lo que en aplicación estricta del artículo 128 de la CP arriba citado, no hay lugar a acceder a las aspiraciones de la parte actora. No obstante, este postulado es apenas aparente y no resulta acorde con la doctrina asentada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las decisiones SL5792 de 2014 y SL4538 de 2018, en las cuales se expuso que *las prestaciones que tienen su fuente en el sistema general de pensiones, no provienen del tesoro público, pues sus recursos ostentan la condición de parafiscales, ya que los mismos son un patrimonio de afectación, es decir, los bienes que lo conforman se destinan a la finalidad que indica la ley; en tal sentido, sobre esos patrimonios no puede ejercerse disposición alguna, razón por la cual, solo se otorga el carácter de administradoras a las entidades que conforman los diferentes regímenes (artículos 52 y 90 de la ley (sic) 100 de 1993), a quienes se confía su gestión*; autorizando así la compatibilidad pensional entre una pensión de jubilación a cargo de una Caja de Previsión Social y la causada a cargo del RPMPD con fundamento en tiempos diferentes de servicio, al no resultar jurídicamente acertado reconocer dos prestaciones con idéntico fin y causa acudiendo al mismo tiempo de servicios o si se quiere, de cotizaciones.

En este entendido, no aflora la incompatibilidad aducida por la demandada como tesis principal de su defensa, pues la interpretación plausible contenida en la doctrina antes descrita, en efecto autoriza la compatibilidad de la pensión de jubilación reconocida al pretensor por parte de CAPRECOM E.I.C.E. con la anhelada a cargo de COLPENSIONES E.I.C.E., como bien lo concluyó el *a quo*, pues mientras que la primera de estas tuvo en cuenta de manera exclusiva y excluyente el tiempo servido a TELECOM, para la segunda, se invocan cotizaciones abiertamente distintas, como lo son, las efectuadas a partir del 1° de septiembre de 1977 y hasta el 30 de noviembre de 1996, a través de empleadores del sector privado como lo son el

Colegio San Luis Rey, Colegio San Francisco Solano y Colegio Fray Damián González así como el prestado a la Junta Administradora de Deporte del Quindío como entidad pública del nivel nacional (págs.36 a 45, doc.01, carp.01).

Como corolario a lo anterior, la decisión proferida en primera instancia no ofrece los yerros atribuidos por la censura, en la medida en que resultó ajustado a derecho declarar la compatibilidad entre la pensión de jubilación reconocida al demandante en época pretérita por parte de CAPRECOM E.I.C.E. y la causada por virtud del Acuerdo 049 de 1990, al derivarse de distintos tiempos de servicio y fuentes de financiamiento, y encontrar soporte en distintos regímenes pensionales; razones que se estiman suficientes para confirmar la decisión cuestionada en este sentido.

2.3.2 De la causación y cuantía de la mesada pensional

Para desatar este aspecto puntual del litigio, huelga recordar que ante la creación del sistema general de seguridad social a partir de la promulgación de la Ley 100 de 1993, el legislador en aras de no frustrar la expectativa pensional legítima de todas aquellas personas que a la entrada en vigencia de SGSS estuvieran a punto de adquirir su derecho pensional con base a una norma anterior, estableció a título de excepción el denominado régimen de transición; enseñando en el artículo 36 que *la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.*

En tal sentido y como se anticipara, no suscitó discusión alguna la circunstancia de que el señor DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ para el 1º de abril de 1994 contara con más de 40 años de edad, como quiera que su fecha de nacimiento corresponde al 10 de junio de 1935, por lo que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 había alcanzado poco más de 58 años de edad, lo que se verifica con la copia de la cédula de ciudadanía adosada al expediente (pág.13, doc.01, carp.01), circunstancia particular que se adecúa al supuesto de hecho contemplado en el artículo 36 de la tantas veces mencionada Ley 100 de 1993, que autoriza a acudir a la legislación anterior para definir el derecho pensional.

Seguidamente, debe indicarse que el mencionado régimen de transición pensional fue objeto de pronunciamiento en el Acto Legislativo 01 de 2005, mediante el cual se adicionó al artículo 48 de la CP, en cuyo párrafo transitorio 4º, se señaló que:

"El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014".

Por tanto, se hace necesario verificar si el demandante inicialmente causó el derecho pensional dentro de cualquiera de los dos límites temporales antes descritos, esto es, antes del 31 de julio de 2010, para de esta manera excusarse del requisito de semanas cotizadas a la fecha de vigencia del mencionado acto legislativo, o si por el contrario, de entenderse causado el derecho pensional después del 31 de julio de 2010, solo se permite extender los beneficios del régimen de transición hasta diciembre del año 2014, si y solo si, acredita contar con 750 semanas cotizadas al 29 de julio de 2005.

Con el fin de zanjar este aspecto de la controversia conviene memorar que i. el señor DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ a partir del 1º de julio de 1977 efectuó cotizaciones al seguro obligatorio administrado por el entonces Instituto de Seguros Sociales y aun a través de la Caja Nacional de Previsión Social, para un total de 710,85 semanas a noviembre de 1996 (págs.36 a 45 doc.01, carp.01), y ii. arribó a los 60 años de edad el 10 de junio de 1995, previo a que se extinguiera el régimen de transición (31 de julio de 2010), pues se itera, nació el mismo día y mes del año 1935 (pág.13, doc.01, carp.01); lo que le permitió acceder al reconocimiento de la pensión de vejez bajo las prerrogativas del régimen de transición.

El régimen legal anterior hace referencia a las condiciones que regulaban el acceso al reconocimiento de la pensión de vejez con anterioridad a la entrada vigencia de la Ley 100 de 1993, y para establecer cuál es el régimen anterior aplicable para el caso que nos ocupa, bastaría con identificar cuáles eran las condiciones que regulaban el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez de los afiliados que para el 01 de abril de 1994 se encontraban vinculados laboralmente al sector privado, y habían realizado cotizaciones a través del sector público, advirtiéndose que si se hiciera una abstracción de la Ley 100 de 1993, la situación del afiliado que se encuentre en la hipótesis planteada estaría regulada, en principio, por la Ley 71 de 1988, la cual permite acumular los aportes sufragados en entidades de previsión social, el tiempo de servicio en el sector público, y las cotizaciones efectuadas al ISS para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez; siendo relevante memorar que, aunque la jurisprudencia sostenía que bajo su égida de aplicación no era posible acumular tiempos de

servicio sin aportes con aquellos efectivamente cotizados al ISS, lo cierto es que, tal criterio varió a partir de la sentencia SL4457 de 2014, con la que se permite su contabilización.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia también sostenía que con arreglo al régimen pensional del Decreto 758 de 1990, solo era posible computar semanas cotizadas exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales por cuanto, a la luz de sus reglamentos, no existía una sola disposición que autorizara la sumatoria de semanas laboradas en el sector público, sufragadas a cajas, fondos o entidades de previsión social o, simplemente, no cotizadas. De igual modo, había considerado que el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, inserto en la disposición legal que establece el régimen de transición, si bien, en principio, alude a las pensiones obtenidas en aplicación de ese régimen (el de la Ley 100), lo cierto es que, dicha referencia corresponde a la pensión de vejez instituida en el nuevo sistema de seguridad social, siendo esencialmente una iteración de los parámetros consagrados en el parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL del 04-11-2004, radicado 23611, rememorada entre muchas otras, en las sentencias CSJ SL del 10-03-2009, radicado 35792, CSJ SL del 17-05-2011, radicado 42242, CSJ SL, del 06-09-2012, radicado 42191, SL4461 de 2014, SL1073 de 2017, SL517 de 2018, SL4010 de 2019 y SL5614 de 2019).

Empero, el máximo tribunal de esta jurisdicción morigeró su criterio jurisprudencial a partir de la sentencia SL1981 de 2020, según la cual los beneficiarios del régimen de transición, como lo es el caso del demandante, son afiliados del sistema general de seguridad social y, por consiguiente, salvo en lo que respecta a la edad, tiempo de cotización y monto de la pensión, las directrices, principios y reglas de la Ley 100 de 1993 les aplica en su integridad, “... *lo que incluye la posibilidad de sumar todas las semanas prestadas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS hoy Colpensiones o, simplemente, no cotizadas, tal como sucede en el asunto*” (SL4529 de 2020). Bajo esa línea jurisprudencial reiterada, entre otras, en las sentencias SL2557 de 2020 y SL2659 de 2020, se concluye sin dubitación alguna, que sí es dable contabilizar las semanas laboradas en el sector público para efectos de reconocer la pensión por vejez que prevé el Decreto 758 de 1990, criterio que resulta aplicable al derecho pensional que aquí se pretende, razón por la cual la Sala confirmará en este aspecto la sentencia apelada y consultada.

Así las cosas, y sin que sea objeto de debate que el señor DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ acreditó los requisitos para causar el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez bajo la égida del Decreto 758 de 1990, esto es, 55 años de edad, para las mujeres, o 60 años de edad, para los hombres, y 500 semanas de cotización durante los últimos 20 años anteriores al

cumplimiento de la edad, o 1.000 semanas en cualquier tiempo (artículo 12 del Decreto 758 de 1990), siendo que el mismo arribó a los 60 años de edad el 10 de junio de 1995, dado que nació el 10 de junio de 1935, cotizó 641 semanas (4.487 días) en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, esto es, entre el 10 de junio de 1975 y el 10 de junio de 1995 (págs.36 a 45 doc.01, carp.01).

Aclarado lo anterior, es de recordar que para los beneficiarios del régimen de transición que a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral, estuvieran a más de 10 años de consolidar el derecho a la pensión, el IBL se establece con el promedio de los salarios que sirvieron como base de cotización durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o el promedio de toda la vida laboral, siempre que el afiliado hubiere cotizado más de 1.250 semanas, y que dicho promedio resulte superior al de los últimos 10 años (artículo 21 de la Ley 100 de 1993), y para quienes les faltaren menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, con el promedio de lo devengado por el afiliado durante el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, o el cotizado durante todo el tiempo, si este fuere superior (inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), grupo poblacional respecto del cual no se contempló la posibilidad de liquidar el IBL con los salarios que sirvieron como base de cotización durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, tal y como lo ha definido de manera uniforme y pacífica nuestro órgano jurisdiccional de cierre (CSJ SL del 15-02-2011, radicado 44238; SL del 17-04-2012, radicado 53037, SL-570 del 06-08-2013, radicado 56460; SL-17476 del 10-12-2014, radicado 45074; SL-2982 del 25-02-2015, radicado 52404; SL-6398 del 27-04-2016, radicado 46343; SL-12709 del 18-07-2017, radicado 54031; SL4975 del 14-11-2018, radicado 43278, SL-2587 del 08-07-2020, radicado 73921).

De cara a lo anterior, es preciso memorar que el señor DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ nació el 10 de junio de 1935 (pág.13, doc.01, carp.01), y que para el 01 de abril de 1994 contaba con 58 años de edad, esto es, le faltaban poco más de uno (1) año para causar el derecho a la pensión de vejez, de lo que se desglosa que, el IBL debe establecerse con el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para el reconocimiento de la pensión, o el promedio de toda la vida laboral según resulte más favorable, descartando con ello el cálculo del monto de la mesada pensional con el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años, como lo determinó el *a quo*.

Realizadas las operaciones aritméticas correspondientes, la Sala encontró que el promedio de los salarios devengados durante toda la vida (705,86 semanas – 4.941 días), asciende a \$378.574,43, y que el promedio de los salarios devengados durante el tiempo que le hacía

falta para causar el derecho a la pensión (57,71 semanas – 404 días) asciende a \$226.800, siendo el primero el más favorable para el afiliado.

Ahora bien, es cierto que, al realizar la operación aritmética antes descrita el cognoscente de primera instancia arribó a la conclusión de que el IBL de toda la vida laboral ascendía a la suma de \$317.147,54, cifra que resulta inferior a la calculada por esta Corporación; diferencia que se origina en el IPC aplicado para actualizar los salarios, siendo que el *a quo* aplicó la tasa prevista para el año 1995 (18,29), mientras que esta Sala aplicó el porcentaje del año 1996 (21,83), considerando que la pensión de vejez se causó y reconoció a partir del año 1996, data de la última cotización efectuada por el promotor al SGSSI, por lo que los salarios debían actualizarse hasta el año inmediatamente anterior (1995), razón por la cual se modificará la sentencia apelada en este preciso aspecto.

En lo que respecta al monto o tasa de reemplazo, se memora que en los términos del Decreto 758 de 1990, la pensión de vejez se liquida con base en un monto inicial del 45% y aumentos equivalentes al 3% por cada 50 semanas cotizadas que superen las primeras 500 hasta llegar al 90% por 1.250 semanas cotizadas (artículo 20), y como el actor cotizó 705,86 semanas, la tasa de reemplazo corresponde al 57%, que aplicada sobre un IBL de \$378.57,43, arroja una mesada inicial de \$215.787 para el año 1996 ($\$378.574,43 \times 57\% = \215.787), cifra que resulta superior a la reconocida por el fallador de primer grado, y por ello debe ser objeto de modificación el valor del retroactivo que fuera así calculado.

Ahora, en lo que respecta concretamente a las mesadas pensionales a las que la parte actora tiene derecho a percibir, tal y como como se expuso en la decisión impugnada, operó parcialmente el fenómeno de la prescripción, en vista de que, desde la fecha de su causación, 1 de diciembre de 1996, y la fecha de su reclamación ante el ente de seguridad social, el 24 de agosto de 2018 (págs.62 a 77, doc.01, carp.01), transcurrió el término trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS. Así las cosas, COLPENSIONES E.I.C.E. deberá reconocer a favor de la masa sucesoral del señor DARIO GARRIDO JIEMENEZ, la suma de \$78.509.200,00, y que corresponde a las mesadas pensionales reconocidas a partir del 24 de agosto de 2015 y hasta el 16 de julio de 2021, al ser la fecha de deceso de aquel.

2.3.3 De los intereses moratorios

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993, consagró el derecho al reconocimiento y pago de la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago, los cuales (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena

o mala fe no es relevante para su interposición, (ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran su imposición, siempre y cuando haya razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de reglas jurisprudenciales (CSJ SL-1019 del 03-03-2021, Radicado 86195).

En cuanto a la fecha a partir de la cual se hacen exigibles, la jurisprudencia ha enfatizado reiteradamente que los citados intereses comienzan a causarse desde la fecha en la que empieza el retardo del pago del beneficio pensional, por lo que se debe precisar que solo es dable hablar de retardo cuando se ha incumplido con el término establecido en la Ley para el reconocimiento de la prestación, que es de cuatro meses en tratándose pensiones de vejez, según lo previsto en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994 (CSJ SL del 15-05-2008, Radicado 33233; SL del 17-04-2012, Radicado 42488, SL-1023 del 17-03-2021, Radicado 81812).

Así las cosas, y extrapolando los lineamientos jurisprudenciales esbozados al asunto que ocupa la atención de la Sala, se encuentra que, transcurrieron más de cuatro meses desde la fecha en que el señor DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, el 24 de agosto de 2018, sin que la entidad accionada reconociera y pagara el retroactivo pensional o adujera y probara la existencia de una razón atendible que la liberaría de tal condena, lo que como vimos no ocurrió, y siendo ello así, lo procedente es revocar el fallo de primer grado, en cuanto absolvió al ente de seguridad social encausado del reconocimiento y pago de los intereses deprecados, para en su lugar, ordenar el pago de los mismos a partir del 25 de diciembre de 2018, es decir, cuatro meses después de la fecha de reclamación de la prestación económica y hasta que se verifique el pago total de la obligación, los cuales deberán calcularse sobre el valor que efectivamente se cancelará a la parte actora, esto es, sin que previamente se descuenten los aportes para el Sistema General de Salud, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, y advirtiendo que el recurso de apelación de la parte demandante fue resuelto en favor de las pretensiones del litigioso por activa y que la decisión de primer grado fue revisada en el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de COLPENSIONES E.I.C.E., no se impondrán costas procesales.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, el 28 de marzo de 2022, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ, en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. y donde fue integrada la UGPP, el cual quedará así:

*SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, representada legalmente por JUAN MIGUEL VILLA LORA o por quien haga sus veces, a reconocer y pagar a favor de la masa sucesoral del señor DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ el retroactivo generado por concepto de pensión de vejez, liquidado entre el 24 de agosto de 2015 y el 16 de julio de 2021, data esta última de fallecimiento del señor GARRIDO JIMÉNEZ, un valor total de **\$79.325.299,00**. Sobre el retroactivo pensional reconocido, se autoriza a la entidad demandada a realizar el descuento de cotización al sistema de seguridad social en salud.*

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal TERCERO de la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, el 28 de marzo de 2022, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ, en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. y donde fue integrada la UGPP, para en su lugar, CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer y pagar a favor de la masa sucesoral del señor DARÍO GARRIDO JIMÉNEZ los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 25 de diciembre de 2018 y hasta que se verifique el pago total del retroactivo generado por concepto de pensión de vejez, liquidado entre el 24 de agosto de 2015 y el 16 de julio de 2021, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.

TECERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia revisada en apelación y consulta.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

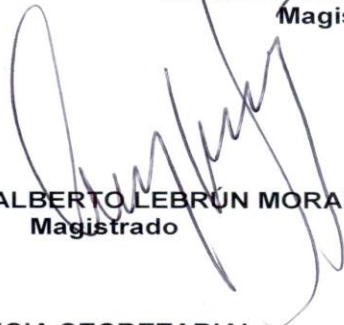
Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



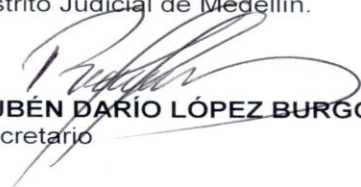
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Seccional de la Judicatura –Antioquia

Dirección Seccional Administración Judicial Medellín- Antioquia

CALCULO IBL TODA LA VIDA LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

F. INICIAL	1-sep-77	TOTAL DIAS	4941
F. FINAL	30-nov-96		

DESDE	HASTA	IBC O SALARIO	No. DIAS	SALARIO INDEXADO	PROMEDIO	AÑO FINAL	INDICE IPC FINAL	AÑO INICIAL	INDICE IPC INICIAL
1-sep-77	30-sep-77	\$ 5.790	30	\$ 344.624	\$ 2.092	1995	21,83	1976	0,37
1-oct-77	31-oct-77	\$ 5.790	31	\$ 344.624	\$ 2.162	1995	21,83	1976	0,37
1-nov-77	30-nov-77	\$ 5.790	30	\$ 344.624	\$ 2.092	1995	21,83	1976	0,37
1-dic-77	31-dic-77	\$ 5.790	31	\$ 344.624	\$ 2.162	1995	21,83	1976	0,37
1-ene-78	31-ene-78	\$ 5.790	31	\$ 267.727	\$ 1.680	1995	21,83	1977	0,47
1-feb-78	28-feb-78	\$ 5.790	28	\$ 267.727	\$ 1.517	1995	21,83	1977	0,47
1-mar-78	31-mar-78	\$ 5.790	31	\$ 267.727	\$ 1.680	1995	21,83	1977	0,47
1-abr-78	30-abr-78	\$ 5.790	30	\$ 267.727	\$ 1.626	1995	21,83	1977	0,47
1-may-78	31-may-78	\$ 5.790	31	\$ 267.727	\$ 1.680	1995	21,83	1977	0,47
1-jun-78	30-jun-78	\$ 5.790	30	\$ 267.727	\$ 1.626	1995	21,83	1977	0,47
1-jul-78	31-jul-78	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1977	0,47
1-ago-78	31-ago-78	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1977	0,47
1-sep-78	30-sep-78	\$ 5.790	30	\$ 267.727	\$ 1.626	1995	21,83	1977	0,47
1-oct-78	31-oct-78	\$ 5.790	31	\$ 267.727	\$ 1.680	1995	21,83	1977	0,47
1-nov-78	30-nov-78	\$ 5.790	30	\$ 267.727	\$ 1.626	1995	21,83	1977	0,47
1-dic-78	31-dic-78	\$ 5.790	31	\$ 267.727	\$ 1.680	1995	21,83	1977	0,47
1-ene-79	31-ene-79	\$ 5.790	31	\$ 226.065	\$ 1.418	1995	21,83	1978	0,56
1-feb-79	28-feb-79	\$ 5.790	28	\$ 226.065	\$ 1.281	1995	21,83	1978	0,56
1-mar-79	31-mar-79	\$ 20.490	31	\$ 800.014	\$ 5.019	1995	21,83	1978	0,56
1-abr-79	30-abr-79	\$ 35.100	30	\$ 1.370.448	\$ 8.321	1995	21,83	1978	0,56
1-may-79	31-may-79	\$ 29.310	31	\$ 1.144.383	\$ 7.180	1995	21,83	1978	0,56
1-jun-79	30-jun-79	\$ 14.700	30	\$ 573.948	\$ 3.485	1995	21,83	1978	0,56
1-jul-79	31-jul-79	\$ 14.700	31	\$ 573.948	\$ 3.601	1995	21,83	1978	0,56
1-ago-79	31-ago-79	\$ 14.700	31	\$ 573.948	\$ 3.601	1995	21,83	1978	0,56
1-sep-79	30-sep-79	\$ 14.700	30	\$ 573.948	\$ 3.485	1995	21,83	1978	0,56
1-oct-79	31-oct-79	\$ 14.700	31	\$ 573.948	\$ 3.601	1995	21,83	1978	0,56
1-nov-79	30-nov-79	\$ 14.700	30	\$ 573.948	\$ 3.485	1995	21,83	1978	0,56
1-dic-79	31-dic-79	\$ 14.700	31	\$ 573.948	\$ 3.601	1995	21,83	1978	0,56
1-ene-80	31-ene-80	\$ 15.700	31	\$ 475.941	\$ 2.986	1995	21,83	1979	0,72
1-feb-80	29-feb-80	\$ 15.700	29	\$ 475.941	\$ 2.793	1995	21,83	1979	0,72
1-mar-80	31-mar-80	\$ 15.700	31	\$ 475.941	\$ 2.986	1995	21,83	1979	0,72
1-abr-80	30-abr-80	\$ 15.700	30	\$ 475.941	\$ 2.890	1995	21,83	1979	0,72
1-may-80	31-may-80	\$ 15.700	31	\$ 475.941	\$ 2.986	1995	21,83	1979	0,72
1-jun-80	30-jun-80	\$ 15.700	30	\$ 475.941	\$ 2.890	1995	21,83	1979	0,72
1-jul-80	31-jul-80	\$ 15.700	31	\$ 475.941	\$ 2.986	1995	21,83	1979	0,72
1-ago-80	31-ago-80	\$ 15.700	31	\$ 475.941	\$ 2.986	1995	21,83	1979	0,72
1-sep-80	30-sep-80	\$ 15.700	30	\$ 475.941	\$ 2.890	1995	21,83	1979	0,72
1-oct-80	31-oct-80	\$ 15.700	31	\$ 475.941	\$ 2.986	1995	21,83	1979	0,72
1-nov-80	30-nov-80	\$ 15.700	30	\$ 475.941	\$ 2.890	1995	21,83	1979	0,72
1-dic-80	31-dic-80	\$ 15.700	31	\$ 475.941	\$ 2.986	1995	21,83	1979	0,72
1-ene-81	31-ene-81	\$ 19.700	31	\$ 474.639	\$ 2.978	1995	21,83	1980	0,91
1-feb-81	28-feb-81	\$ 19.700	28	\$ 474.639	\$ 2.690	1995	21,83	1980	0,91
1-mar-81	31-mar-81	\$ 19.700	31	\$ 474.639	\$ 2.978	1995	21,83	1980	0,91
1-abr-81	30-abr-81	\$ 19.700	30	\$ 474.639	\$ 2.882	1995	21,83	1980	0,91
1-may-81	31-may-81	\$ 19.700	31	\$ 474.639	\$ 2.978	1995	21,83	1980	0,91
1-jun-81	30-jun-81	\$ 19.700	30	\$ 474.639	\$ 2.882	1995	21,83	1980	0,91
1-jul-81	31-jul-81	\$ 19.700	31	\$ 474.639	\$ 2.978	1995	21,83	1980	0,91
1-ago-81	31-ago-81	\$ 19.700	31	\$ 474.639	\$ 2.978	1995	21,83	1980	0,91
1-sep-81	30-sep-81	\$ 19.700	30	\$ 474.639	\$ 2.882	1995	21,83	1980	0,91
1-oct-81	31-oct-81	\$ 19.700	31	\$ 474.639	\$ 2.978	1995	21,83	1980	0,91
1-nov-81	30-nov-81	\$ 19.700	30	\$ 474.639	\$ 2.882	1995	21,83	1980	0,91
1-dic-81	31-dic-81	\$ 19.700	31	\$ 474.639	\$ 2.978	1995	21,83	1980	0,91
1-ene-82	31-ene-82					1995	21,83	1981	1,14
1-feb-82	28-feb-82					1995	21,83	1981	1,14
1-mar-82	31-mar-82					1995	21,83	1981	1,14
1-abr-82	30-abr-82					1995	21,83	1981	1,14
1-may-82	31-may-82					1995	21,83	1981	1,14
1-jun-82	30-jun-82					1995	21,83	1981	1,14
1-jul-82	31-jul-82					1995	21,83	1981	1,14
1-ago-82	31-ago-82					1995	21,83	1981	1,14
1-sep-82	30-sep-82					1995	21,83	1981	1,14
1-oct-82	31-oct-82					1995	21,83	1981	1,14
1-nov-82	30-nov-82					1995	21,83	1981	1,14
1-dic-82	31-dic-82					1995	21,83	1981	1,14
1-ene-83	31-ene-83					1995	21,83	1982	1,42
1-feb-83	28-feb-83					1995	21,83	1982	1,42
1-mar-83	31-mar-83					1995	21,83	1982	1,42
1-abr-83	30-abr-83					1995	21,83	1982	1,42
1-may-83	31-may-83					1995	21,83	1982	1,42
1-jun-83	30-jun-83					1995	21,83	1982	1,42
1-jul-83	31-jul-83					1995	21,83	1982	1,42
1-ago-83	31-ago-83					1995	21,83	1982	1,42

CALCULO IBL TODA LA VIDA LABORAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

F. INICIAL	1-sep-77	TOTAL DIAS	4941
F. FINAL	30-nov-96		

DESDE	HASTA	IBC O SALARIO	No. DIAS	SALARIO INDEXADO	PROMEDIO	AÑO FINAL	INDICE IPC FINAL	AÑO INICIAL	INDICE IPC INICIAL
1-sep-83	30-sep-83					1995	21,83	1982	1,42
1-oct-83	31-oct-83					1995	21,83	1982	1,42
1-nov-83	30-nov-83					1995	21,83	1982	1,42
1-dic-83	31-dic-83					1995	21,83	1982	1,42
1-ene-84	31-ene-84					1995	21,83	1983	1,66
1-feb-84	29-feb-84					1995	21,83	1983	1,66
1-mar-84	31-mar-84					1995	21,83	1983	1,66
1-abr-84	30-abr-84					1995	21,83	1983	1,66
1-may-84	31-may-84					1995	21,83	1983	1,66
1-jun-84	30-jun-84					1995	21,83	1983	1,66
1-jul-84	31-jul-84					1995	21,83	1983	1,66
1-ago-84	31-ago-84					1995	21,83	1983	1,66
1-sep-84	30-sep-84	\$ 30.150	10	\$ 397.684	\$ 805	1995	21,83	1983	1,66
1-oct-84	31-oct-84	\$ 30.150	31	\$ 397.684	\$ 2.495	1995	21,83	1983	1,66
1-nov-84	30-nov-84	\$ 30.150	30	\$ 397.684	\$ 2.415	1995	21,83	1983	1,66
1-dic-84	31-dic-84	\$ 30.150	31	\$ 397.684	\$ 2.495	1995	21,83	1983	1,66
1-ene-85	31-ene-85	\$ 30.150	31	\$ 336.132	\$ 2.109	1995	21,83	1984	1,96
1-feb-85	28-feb-85	\$ 30.150	28	\$ 336.132	\$ 1.905	1995	21,83	1984	1,96
1-mar-85	31-mar-85	\$ 30.150	31	\$ 336.132	\$ 2.109	1995	21,83	1984	1,96
1-abr-85	30-abr-85	\$ 30.150	30	\$ 336.132	\$ 2.041	1995	21,83	1984	1,96
1-may-85	31-may-85	\$ 30.150	31	\$ 336.132	\$ 2.109	1995	21,83	1984	1,96
1-jun-85	30-jun-85	\$ 30.150	30	\$ 336.132	\$ 2.041	1995	21,83	1984	1,96
1-jul-85	31-jul-85	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1984	1,96
1-ago-85	31-ago-85	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1984	1,96
1-sep-85	30-sep-85	\$ 39.310	27	\$ 438.254	\$ 2.395	1995	21,83	1984	1,96
1-oct-85	31-oct-85	\$ 39.310	31	\$ 438.254	\$ 2.750	1995	21,83	1984	1,96
1-nov-85	30-nov-85	\$ 39.310	30	\$ 438.254	\$ 2.661	1995	21,83	1984	1,96
1-dic-85	31-dic-85	\$ 39.310	31	\$ 438.254	\$ 2.750	1995	21,83	1984	1,96
1-ene-86	31-ene-86	\$ 39.310	31	\$ 357.894	\$ 2.245	1995	21,83	1985	2,40
1-feb-86	28-feb-86	\$ 39.310	28	\$ 357.894	\$ 2.028	1995	21,83	1985	2,40
1-mar-86	31-mar-86	\$ 39.310	31	\$ 357.894	\$ 2.245	1995	21,83	1985	2,40
1-abr-86	30-abr-86	\$ 39.310	30	\$ 357.894	\$ 2.173	1995	21,83	1985	2,40
1-may-86	31-may-86	\$ 39.310	31	\$ 357.894	\$ 2.245	1995	21,83	1985	2,40
1-jun-86	30-jun-86	\$ 39.310	30	\$ 357.894	\$ 2.173	1995	21,83	1985	2,40
1-jul-86	31-jul-86	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1985	2,40
1-ago-86	31-ago-86	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1985	2,40
1-sep-86	30-sep-86	\$ 47.370	20	\$ 431.276	\$ 1.746	1995	21,83	1985	2,40
1-oct-86	31-oct-86	\$ 47.370	31	\$ 431.276	\$ 2.706	1995	21,83	1985	2,40
1-nov-86	30-nov-86	\$ 47.370	30	\$ 431.276	\$ 2.619	1995	21,83	1985	2,40
1-dic-86	31-dic-86	\$ 47.370	31	\$ 431.276	\$ 2.706	1995	21,83	1985	2,40
1-ene-87	31-ene-87	\$ 47.370	31	\$ 356.528	\$ 2.237	1995	21,83	1986	2,90
1-feb-87	28-feb-87	\$ 47.370	28	\$ 356.528	\$ 2.020	1995	21,83	1986	2,90
1-mar-87	31-mar-87	\$ 47.370	31	\$ 356.528	\$ 2.237	1995	21,83	1986	2,90
1-abr-87	30-abr-87	\$ 47.370	30	\$ 356.528	\$ 2.165	1995	21,83	1986	2,90
1-may-87	31-may-87	\$ 47.370	31	\$ 356.528	\$ 2.237	1995	21,83	1986	2,90
1-jun-87	30-jun-87	\$ 47.370	30	\$ 356.528	\$ 2.165	1995	21,83	1986	2,90
1-jul-87	31-jul-87	\$ 47.370	9	\$ 356.528	\$ 649	1995	21,83	1986	2,90
1-ago-87	31-ago-87	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1986	2,90
1-sep-87	30-sep-87	\$ 61.950	21	\$ 466.264	\$ 1.982	1995	21,83	1986	2,90
1-oct-87	31-oct-87	\$ 61.950	31	\$ 466.264	\$ 2.925	1995	21,83	1986	2,90
1-nov-87	30-nov-87	\$ 61.950	30	\$ 466.264	\$ 2.831	1995	21,83	1986	2,90
1-dic-87	31-dic-87	\$ 61.950	31	\$ 466.264	\$ 2.925	1995	21,83	1986	2,90
1-ene-88	31-ene-88	\$ 61.950	31	\$ 375.977	\$ 2.359	1995	21,83	1987	3,60
1-feb-88	29-feb-88	\$ 61.950	29	\$ 375.977	\$ 2.207	1995	21,83	1987	3,60
1-mar-88	31-mar-88	\$ 61.950	31	\$ 375.977	\$ 2.359	1995	21,83	1987	3,60
1-abr-88	30-abr-88	\$ 61.950	30	\$ 375.977	\$ 2.283	1995	21,83	1987	3,60
1-may-88	31-may-88	\$ 61.950	31	\$ 375.977	\$ 2.359	1995	21,83	1987	3,60
1-jun-88	30-jun-88	\$ 61.950	30	\$ 375.977	\$ 2.283	1995	21,83	1987	3,60
1-jul-88	31-jul-88	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1987	3,60
1-ago-88	31-ago-88	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1987	3,60
1-sep-88	30-sep-88	\$ 70.260	30	\$ 426.411	\$ 2.589	1995	21,83	1987	3,60
1-oct-88	31-oct-88	\$ 70.260	31	\$ 426.411	\$ 2.675	1995	21,83	1987	3,60
1-nov-88	30-nov-88	\$ 70.260	30	\$ 426.411	\$ 2.589	1995	21,83	1987	3,60
1-dic-88	31-dic-88	\$ 70.260	31	\$ 426.411	\$ 2.675	1995	21,83	1987	3,60
1-ene-89	31-ene-89	\$ 70.260	31	\$ 332.824	\$ 2.088	1995	21,83	1988	4,61
1-feb-89	28-feb-89	\$ 70.260	28	\$ 332.824	\$ 1.886	1995	21,83	1988	4,61
1-mar-89	31-mar-89	\$ 70.260	31	\$ 332.824	\$ 2.088	1995	21,83	1988	4,61
1-abr-89	30-abr-89	\$ 70.260	30	\$ 332.824	\$ 2.021	1995	21,83	1988	4,61
1-may-89	31-may-89	\$ 70.260	31	\$ 332.824	\$ 2.088	1995	21,83	1988	4,61
1-jun-89	30-jun-89	\$ 70.260	30	\$ 332.824	\$ 2.021	1995	21,83	1988	4,61
1-jul-89	31-jul-89	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1988	4,61
1-ago-89	31-ago-89	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1988	4,61
1-sep-89	30-sep-89	\$ 89.070	20	\$ 421.927	\$ 1.708	1995	21,83	1988	4,61
1-oct-89	31-oct-89	\$ 89.070	31	\$ 421.927	\$ 2.647	1995	21,83	1988	4,61
1-nov-89	30-nov-89	\$ 89.070	30	\$ 421.927	\$ 2.562	1995	21,83	1988	4,61
1-dic-89	31-dic-89	\$ 89.070	31	\$ 421.927	\$ 2.647	1995	21,83	1988	4,61
1-ene-90	31-ene-90	\$ 89.070	31	\$ 334.695	\$ 2.100	1995	21,83	1989	5,81
1-feb-90	28-feb-90	\$ 89.070	28	\$ 334.695	\$ 1.897	1995	21,83	1989	5,81
1-mar-90	31-mar-90	\$ 89.070	31	\$ 334.695	\$ 2.100	1995	21,83	1989	5,81
1-abr-90	30-abr-90	\$ 89.070	30	\$ 334.695	\$ 2.032	1995	21,83	1989	5,81
1-may-90	31-may-90	\$ 89.070	31	\$ 334.695	\$ 2.100	1995	21,83	1989	5,81
1-jun-90	30-jun-90	\$ 89.070	30	\$ 334.695	\$ 2.032	1995	21,83	1989	5,81
1-jul-90	31-jul-90	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1989	5,81
1-ago-90	31-ago-90	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1989	5,81
1-sep-90	30-sep-90	\$ 111.000	24	\$ 417.101	\$ 2.026	1995	21,83	1989	5,81

CALCULO IBL TODA LA VIDA LABORAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

F. INICIAL	1-sep-77	TOTAL DIAS	4941
F. FINAL	30-nov-96		

DESDE	HASTA	IBC O SALARIO	No. DIAS	SALARIO INDEXADO	PROMEDIO	AÑO FINAL	INDICE IPC FINAL	AÑO INICIAL	INDICE IPC INICIAL
1-oct-90	31-oct-90	\$ 111.000	31	\$ 417.101	\$ 2.617	1995	21,83	1989	5,81
1-nov-90	30-nov-90	\$ 111.000	30	\$ 417.101	\$ 2.532	1995	21,83	1989	5,81
1-dic-90	31-dic-90	\$ 111.000	31	\$ 417.101	\$ 2.617	1995	21,83	1989	5,81
1-ene-91	31-ene-91	\$ 111.000	31	\$ 315.316	\$ 1.978	1995	21,83	1990	7,69
1-feb-91	28-feb-91	\$ 111.000	28	\$ 315.316	\$ 1.787	1995	21,83	1990	7,69
1-mar-91	31-mar-91	\$ 111.000	31	\$ 315.316	\$ 1.978	1995	21,83	1990	7,69
1-abr-91	30-abr-91	\$ 111.000	30	\$ 315.316	\$ 1.914	1995	21,83	1990	7,69
1-may-91	31-may-91	\$ 111.000	31	\$ 315.316	\$ 1.978	1995	21,83	1990	7,69
1-jun-91	30-jun-91	\$ 111.000	30	\$ 315.316	\$ 1.914	1995	21,83	1990	7,69
1-jul-91	31-jul-91	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1990	7,69
1-ago-91	31-ago-91	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1990	7,69
1-sep-91	30-sep-91	\$ 136.290	15	\$ 387.157	\$ 1.175	1995	21,83	1990	7,69
1-oct-91	31-oct-91	\$ 136.290	31	\$ 387.157	\$ 2.429	1995	21,83	1990	7,69
1-nov-91	30-nov-91	\$ 136.290	30	\$ 387.157	\$ 2.351	1995	21,83	1990	7,69
1-dic-91	31-dic-91	\$ 136.290	31	\$ 387.157	\$ 2.429	1995	21,83	1990	7,69
1-ene-92	31-ene-92	\$ 136.290	31	\$ 305.424	\$ 1.916	1995	21,83	1991	9,74
1-feb-92	29-feb-92	\$ 136.290	29	\$ 305.424	\$ 1.793	1995	21,83	1991	9,74
1-mar-92	31-mar-92	\$ 136.290	31	\$ 305.424	\$ 1.916	1995	21,83	1991	9,74
1-abr-92	30-abr-92	\$ 136.290	30	\$ 305.424	\$ 1.854	1995	21,83	1991	9,74
1-may-92	31-may-92	\$ 136.290	31	\$ 305.424	\$ 1.916	1995	21,83	1991	9,74
1-jun-92	30-jun-92	\$ 136.290	30	\$ 305.424	\$ 1.854	1995	21,83	1991	9,74
1-jul-92	31-jul-92	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1991	9,74
1-ago-92	31-ago-92	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1991	9,74
1-sep-92	30-sep-92	\$ 181.050	8	\$ 405.731	\$ 657	1995	21,83	1991	9,74
1-oct-92	31-oct-92	\$ 181.050	31	\$ 405.731	\$ 2.546	1995	21,83	1991	9,74
1-nov-92	30-nov-92	\$ 181.050	30	\$ 405.731	\$ 2.463	1995	21,83	1991	9,74
1-dic-92	31-dic-92	\$ 181.050	31	\$ 405.731	\$ 2.546	1995	21,83	1991	9,74
1-ene-93	31-ene-93	\$ 181.050	30	\$ 324.430	\$ 1.970	1995	21,83	1992	12,19
1-feb-93	28-feb-93	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1992	12,19
1-mar-93	31-mar-93	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1992	12,19
1-abr-93	30-abr-93	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1992	12,19
1-may-93	31-may-93	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1992	12,19
1-jun-93	30-jun-93	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1992	12,19
1-jul-93	31-jul-93	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1992	12,19
1-ago-93	31-ago-93	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1992	12,19
1-sep-93	30-sep-93	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1992	12,19
1-oct-93	31-oct-93	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1992	12,19
1-nov-93	30-nov-93	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1992	12,19
1-dic-93	31-dic-93	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1992	12,19
1-ene-94	31-ene-94	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1993	14,93
1-feb-94	28-feb-94	\$ 107.675	23	\$ 157.474	\$ 733	1995	21,83	1993	14,93
1-mar-94	31-mar-94	\$ 107.675	31	\$ 157.474	\$ 988	1995	21,83	1993	14,93
1-abr-94	30-abr-94	\$ 98.700	30	\$ 144.348	\$ 876	1995	21,83	1993	14,93
1-may-94	31-may-94	\$ 230.802	31	\$ 337.547	\$ 2.118	1995	21,83	1993	14,93
1-jun-94	30-jun-94	\$ 230.802	30	\$ 337.547	\$ 2.049	1995	21,83	1993	14,93
1-jul-94	31-jul-94	\$ 230.802	31	\$ 337.547	\$ 2.118	1995	21,83	1993	14,93
1-ago-94	31-ago-94	\$ 230.802	31	\$ 337.547	\$ 2.118	1995	21,83	1993	14,93
1-sep-94	30-sep-94	\$ 230.802	30	\$ 337.547	\$ 2.049	1995	21,83	1993	14,93
1-oct-94	31-oct-94	\$ 230.802	31	\$ 337.547	\$ 2.118	1995	21,83	1993	14,93
1-nov-94	30-nov-94	\$ 230.802	30	\$ 337.547	\$ 2.049	1995	21,83	1993	14,93
1-dic-94	31-dic-94	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1993	14,93
1-ene-95	31-ene-95	\$ 190.000	30	\$ 226.800	\$ 1.377	1995	21,83	1994	18,29
1-feb-95	28-feb-95	\$ 190.000	30	\$ 226.800	\$ 1.377	1995	21,83	1994	18,29
1-mar-95	31-mar-95	\$ 190.000	30	\$ 226.800	\$ 1.377	1995	21,83	1994	18,29
1-abr-95	30-abr-95	\$ 190.000	30	\$ 226.800	\$ 1.377	1995	21,83	1994	18,29
1-may-95	31-may-95	\$ 190.000	30	\$ 226.800	\$ 1.377	1995	21,83	1994	18,29
1-jun-95	30-jun-95	\$ 190.000	30	\$ 226.800	\$ 1.377	1995	21,83	1994	18,29
1-jul-95	31-jul-95	\$ 190.000	30	\$ 226.800	\$ 1.377	1995	21,83	1994	18,29
1-ago-95	31-ago-95	\$ 190.000	30	\$ 226.800	\$ 1.377	1995	21,83	1994	18,29
1-sep-95	30-sep-95	\$ 190.000	30	\$ 226.800	\$ 1.377	1995	21,83	1994	18,29
1-oct-95	31-oct-95	\$ 190.000	30	\$ 226.800	\$ 1.377	1995	21,83	1994	18,29
1-nov-95	30-nov-95	\$ 190.000	30	\$ 226.800	\$ 1.377	1995	21,83	1994	18,29
1-dic-95	31-dic-95	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1994	18,29
1-ene-96	31-ene-96	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	1995	21,83	1995	21,83
1-feb-96	29-feb-96	\$ 247.000	30	\$ 247.000	\$ 1.500	1995	21,83	1995	21,83
1-mar-96	31-mar-96	\$ 247.000	30	\$ 247.000	\$ 1.500	1995	21,83	1995	21,83
1-abr-96	30-abr-96	\$ 247.000	30	\$ 247.000	\$ 1.500	1995	21,83	1995	21,83
1-may-96	31-may-96	\$ 247.000	30	\$ 247.000	\$ 1.500	1995	21,83	1995	21,83
1-jun-96	30-jun-96	\$ 247.000	30	\$ 247.000	\$ 1.500	1995	21,83	1995	21,83
1-jul-96	31-jul-96	\$ 247.000	30	\$ 247.000	\$ 1.500	1995	21,83	1995	21,83
1-ago-96	31-ago-96	\$ 247.000	30	\$ 247.000	\$ 1.500	1995	21,83	1995	21,83
1-sep-96	30-sep-96	\$ 247.000	30	\$ 247.000	\$ 1.500	1995	21,83	1995	21,83
1-oct-96	31-oct-96	\$ 247.000	30	\$ 247.000	\$ 1.500	1995	21,83	1995	21,83
1-nov-96	30-nov-96	\$ 247.000	30	\$ 247.000	\$ 1.500	1995	21,83	1995	21,83

TOTAL DIAS	4941
OTAL SEMANAS	705,86

Ingreso Base de Liquidacion -IBL-	\$ 378.574,43
Semanas Cotizadas	705,86
Tasa de reemplazo	57,00%
Valor pensión	\$ 215.787

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
1988	27,00%			\$ -
1989	26,00%		\$ -	\$ -
1990	26,10%		\$ -	\$ -
1991	26,10%		\$ -	\$ -
1992	25,00%		\$ -	\$ -
1993	22,60%		\$ -	\$ -
1994	22,59%		\$ -	\$ -
1995	19,46%		\$ -	\$ -
1996	21,63%		\$ -	\$ -
1997	17,68%		\$ -	\$ -
1998	16,70%		\$ -	\$ -
1999	9,23%		\$ -	\$ -
2000	8,75%		\$ -	\$ -
2001	7,65%		\$ -	\$ -
2002	6,99%		\$ -	\$ -
2003	6,49%		\$ -	\$ -
2004	5,50%		\$ -	\$ -
2005	4,85%		\$ -	\$ -
2006	4,48%		\$ -	\$ -
2007	5,69%		\$ -	\$ -
2008	7,67%		\$ -	\$ -
2009	2,00%		\$ -	\$ -
2010	3,17%		\$ -	\$ -
2011	3,73%		\$ -	\$ -
2012	2,44%		\$ -	\$ -
2013	1,94%		\$ -	\$ -
2014	3,66%		\$ -	\$ -
2015	6,77%	5,8	\$ 816.099	\$ 4.733.374
2016	5,75%	14	\$ 871.349	\$ 12.198.885
2017	4,09%	14	\$ 921.451	\$ 12.900.320
2018	3,18%	14	\$ 959.139	\$ 13.427.944
2019	3,80%	14	\$ 989.639	\$ 13.854.952
2020	1,61%	14	\$ 1.027.246	\$ 14.381.440
2021	5,62%	7,5	\$ 1.043.784	\$ 7.828.383
2022	13,12%		\$ 1.102.445	\$ -
2023			\$ 1.247.086	\$ -
TOTAL				\$ 79.325.299